

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR [REDACTED]

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 28 de febrero de 2026, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, reclamación formulada por [REDACTED] de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM).

Manifiesta la reclamante lo siguiente:

«El Ayuntamiento de El Álamo, habiéndolo solicitado varias veces, no cumple la normativa de transparencia. No expone las cantidades destinadas ni detalladas de ayuda animales ley 7/2023. Quiero saber todas las cantidades y dónde van a parar, porque a los gatos comunitarios no les llega nada, ni comida, ni vacunas, ni veterinario, ni esterilizaciones. Quiero copia del convenio con Asociación Super Patitas.

No cumple normativa de transparencia sobre bienes propiedad del Ayuntamiento.

No cumple normativa de transparencia sobre a dónde van destinados los fondos públicos sobre ayudas sociales, inexistentes para personas con discapacidad, como es mi caso

No cumple con normativa de transparencia sobre el dinero destinado a obras públicas y su previsión.

No cumple normativa sobre dónde se destinan todos los fondos recaudados por tasa de basuras.

Cobran 1 euro ó 2 euros y sólo pago con tarjeta por emitir volantes de empadronamiento.

No cumplen normativa de transparencia en casi ningún área.

Quiero saber todas las cantidades destinadas a animales callejeros (que son de su propiedad) y detalladas y dónde van a parar, porque a los gatos comunitarios no les llega nada, ni comida, ni vacunas, ni veterinario, ni esterilizaciones. Quiero copia del convenio con Asociación Super Patitas.

Quiero saber relación de bienes propiedad del Ayuntamiento.

Quiero saber a dónde van destinados los fondos públicos sobre ayudas sociales, inexistentes para personas con discapacidad, como es mi caso Y todo lo anteriormente expuesto

Pero sobre todo quiero información pública de todas las cantidades detalladas destinadas a gatos comunitarios y quién o quiénes cobran esas partidas y dónde se destinan.

Y que cumplan íntegramente con la Ley de Transparencia, que en esta población brilla por su ausencia»

No aporta documentación alguna junto a la reclamación.

SEGUNDO. Con el fin de comprobar que la reclamación ha sido presentada en el plazo establecido en artículo 48.2 LTPCM, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), el 6 de marzo de 2026 se requiere a la reclamante para que aporte «la solicitud de acceso a la información pública presentada ante el Ayuntamiento de El Álamo y justificante de registro que acredite la fecha de presentación.»

TERCERO. El requerimiento fue notificado el 6 de marzo de 2026, según consta en el acuse de recibo de la notificación electrónica, que se incorpora al expediente, sin que conste que la reclamante haya aportado la documentación requerida para proceder a la subsanación de la reclamación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. Según dispone el artículo 4.2. d) del Decreto 90/2025, de 19 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de este Consejo, corresponde a su Presidente resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del citado artículo 77.1 a).

SEGUNDO. Según lo dispuesto en el artículo 49 LTPCM, la tramitación de la reclamación, su resolución y publicación se ajustarán a lo establecido en la legislación básica del Estado, concretamente, en la ya citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO. Establece el artículo 68.1 LPAC que, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en los artículos 66 y 67 LPAC y los exigidos por la legislación específica aplicable, en este caso en los artículos 47 y 48 LTPCM, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa.

CUARTO. En este caso, la reclamante no ha aportado la documentación requerida, por lo que procede declarar a la interesada desistida de su solicitud, según le fue advertido en el requerimiento de subsanación notificado el 6 de marzo de 2026.

QUINTO. El artículo 84.1 LPAC establece que: *“pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad”.*

Por su parte, el artículo 21.1 de la misma ley, establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas

RESUELVO

DECLARAR EL DESISTIMIENTO del procedimiento iniciado a instancia de [REDACTED] de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 y 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 114 1.b LPAC), podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA). Todo ello, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente, según dispone el artículo 40.2 LPAC.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS
Jesús María González García

Firmado digitalmente por: GONZÁLEZ GARCÍA JESÚS MARÍA
Fecha: 2026.06.23 13:35